

Introducción

El abordaje analítico sobre la problemática del desarrollo asociada a los procesos migratorios puede dividirse en dos grandes campos: uno convencional, imbuido en el ideario neoliberal, propalado por gobiernos y organismos internacionales comprometidos con la necesidad de garantizar el proceso de valorización de capital en distintos planos y niveles, y otro alternativo, inmerso en el pensamiento crítico, abocado a promover opciones de desarrollo centradas en el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población. Desde la visión convencional, el desarrollo de los lugares de origen se concibe como un producto de la migración. En ese sentido, las remesas se presentan como instrumento o palanca del desarrollo y los migrantes o la diáspora como agentes del desarrollo, incluso como nuevos “héroes del desarrollo”. Se trata de una noción de desarrollo que se reduce a una especie de estrategia paliativa de “combate a la pobreza”, que por supuesto no pretende generar cambios de corte estructural, político e institucional para alcanzar estadios de bienestar humano generalizado. Es una visión ideologizada que en el fondo pretende responsabilizar a los migrantes para detonar el desarrollo de sus lugares de origen —ámbitos marginales para el gran capital— sin tomar en cuenta las causas que precipitaron el subdesarrollo y la migración. Lo anterior a imagen y semejanza de la política social neoliberal que parte del supuesto de que los pobres disponen de recursos propios (un llamado capital social, además de las remesas para el caso de los migrantes) adecuados para superar las condiciones de pobreza. Además de atenuar la pobreza, concurre el propósito político de garantizar la gobernabilidad local, pero sin construir bases sólidas para el desarrollo local, regional y nacional. Esta concepción

encubre una espiral de degradación social que explica la existencia de una migración forzada por el desempleo, inseguridad, violencia e insustentabilidad. En ese contexto, se encadenan procesos de expulsión de fuerza de trabajo, despoblamiento y dependencia de remesas. Superpuesta a esta noción minimalista, el neoliberalismo en realidad promueve la idea de desarrollo como una dinámica de crecimiento económico basada en libre comercio, privatización y maximización de ganancias, con el propósito último de beneficiar a las grandes corporaciones transnacionales que comandan la llamada globalización neoliberal. En esta lógica, el grueso de la población migrante simplemente deviene en insumo productivo, mercancía humana o personal desechable.

En contraste, la visión crítica del desarrollo pretende construir una explicación sobre las causas profundas de la migración para desvelar el papel asignado a los migrantes en la dinámica de acumulación de capital a escala mundial y, posteriormente, explorar la posibilidad de promover una transformación social sustantiva, donde participe la sociedad migrante junto con otros actores y movimientos sociales. En esa inteligencia, un concepto central es el desarrollo desigual, entendido como un complejo proceso de diferenciación entre países desarrollados y subdesarrollados, amén de la expansión de las desigualdades sociales, que soporta la incesante concentración de capital, poder y riqueza en pocas manos frente a procesos de desmantelamiento del sistema productivo y generación de sobrepoblación que no encuentra empleo formal de calidad y que, en respuesta a la demanda de trabajo barata en países centrales, se ve forzada a emigrar para buscar el sustento propio y el de sus dependientes económicos. Desde esta perspectiva, la profundización del subdesarrollo produce migración forzada, que significa una transferencia de recursos en varios sentidos: trasvase poblacional, exportación laboral y subsidio por costos de formación. Ante el desmantelamiento del sistema productivo y la pérdida de soberanía laboral, los países subdesarrollados se abocan a exportar gente como un mecanismo de “válvula de escape” ante el ahondamiento del desempleo estructural y la conflictividad asociada, y como una fuente de divisas, que ha sido considerada, a su vez, fuente del desarrollo ante la ausencia de un proyecto de desarrollo nacional alternativo, dado que se da continuidad al neoliberalismo sin importar sus costos sociales y económicos. Más aún, la verdadera contribución de los migrantes al desarrollo, entendido como un proceso de acumulación de capital centralizado, acontece en los países desarrollados importadores de amplios contingentes de trabajadores baratos, flexibles y desorganizados. En tanto, en los países de

origen, la mayor cuantía de recursos que remiten los migrantes se canaliza principalmente a la subsistencia de los dependientes económicos.

Durante la vigencia del modelo neoliberal y, más aún, a partir de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México se ha consolidado como el principal exportador mundial de trabajadores. Las cifras oficiales, que suelen ser conservadoras, refieren que cada año emigra medio millón de mexicanos, sobre todo a Estados Unidos. La migración compulsiva constituye una respuesta al modelo económico nacional que genera insustentabilidad social, es decir, desigualdad, exclusión y pobreza. En ese sentido, se trata de una migración forzada, puesto que el migrante, en tanto sujeto necesitado, se ve obligado a buscar en otras latitudes una fuente de empleo e ingreso para cubrir la subsistencia familiar. Adicionalmente, la migración representa una fuente permanente de trabajo abundante, barato, flexible y desorganizado para empleadores y corporaciones estadounidenses.

El ascenso vertiginoso de las remesas captadas por los países de alta migración en las últimas dos décadas sirvió para que una pléyade de organismos internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lanzara una agenda internacional de migración y desarrollo basada en el supuesto de que las remesas constituyen un instrumento para el desarrollo, que suple las funciones del capital y el Estado en territorios considerados como inhóspitos para la inversión privada.

En esa perspectiva, las remesas constituyen el nuevo fetiche del desarrollo. Estos recursos se representan como divisa, dinero, circulante monetario con efecto multiplicador, instrumento del desarrollo o un río de oro. El problema ahora consiste en cómo irrigar los terrenos agrestes y aprovechar el caudal de divisas para bancarizar esos recursos, invertirlos productivamente y dotar de infraestructura a las comunidades. Éste es el nuevo mantra del desarrollo.

Empero, no se repara en la naturaleza social de las remesas. Las remesas constituyen una parte del salario devengado por el migrante que se destina a cubrir, total o parcialmente, la subsistencia de los dependientes económicos radicados en los lugares de origen. Por esa razón, se destinan especialmente a la compra de los llamados bienes-salarios, es decir, mercancías que satisfacen las necesidades más elementales, como alimento, vestido, vivienda, salud y educación. La remesa salarial contribuye también a producir nueva fuerza de trabajo migrante. Y, en cierto modo, suple el gasto social del

Estado, que al amparo de su “guerra contra la pobreza”, concede la atribución a los desposeídos de cubrir su propia subsistencia.

En contrapartida, los migrantes destinan otra parte de su salario para cubrir su manutención en el país de destino. Sin embargo, la mayoría de los migrantes mexicanos devenga un falso sobresalario, es decir, un salario aparentemente mayor, si se le compara con la remuneración a la que accedería en su lugar de origen, pero menor si se contrasta con la remuneración promedio que en igualdad de condiciones perciben los trabajadores nativos. Por esa razón, una parte significativa de migrantes mexicanos se cuenta entre los más pobres.

Dado que no existe el más mínimo interés por cambiar el modelo de desarrollo nacional y la inserción subordinada a la economía mundial, en el ánimo de la tecnocracia se impone el propósito de publicitar las llamadas “buenas prácticas” y los “casos exitosos”, enmarcados en la economía de mercado y las políticas de ajuste estructural. Derivado de este esquema, los migrantes son considerados como los nuevos “héroes del desarrollo”, porque han sido señalados como agentes capaces de activar el desarrollo local y regional.

En contados casos, los migrantes empresarios invierten sus recursos, las remesas productivas, en los lugares de origen. No obstante, a fin de respaldar la idea de que los migrantes exitosos promueven el desarrollo local, mucho se publicitan los proyectos empresariales de migrantes, que terminan siendo proyectos individuales y dispersos. En este cometido, han abortado varios programas gubernamentales, como *Invierte en México*. Estos proyectos no han prosperado por la sencilla razón de que en las zonas de alta migración no está garantizada la rentabilidad del capital. En su lugar, algunos microproyectos de subsistencia han sido transfigurados como ejemplos exitosos de migrantes emprendedores, salvo contadas excepciones.

El tipo de remesas que ha ganado una gran atención, pese a que su volumen es mínimo frente a las remesas salariales, son las remesas destinadas a financiar obra pública municipal y proyectos comunitarios. Los recursos recabados por las organizaciones de migrantes, y depositados en fondos de coinversión administrados por el Estado, están inmersos en un esquema de desarrollo participativo transnacional que abona a la estrategia estatal de descentralización y de involucrar a la comunidad para que aporte sus recursos, las remesas, para desencadenar el desarrollo de las localidades y regiones de origen.

Las remesas participativas son mediatizadas o instrumentalizadas por programas como el 3×1 para realizar obras que —bajo un modelo de

desarrollo orientado al bien común y soportado por la responsabilidad social del Estado— deberían de ser competencia del gobierno local. Los principales rubros de inversión son pavimentación, electrificación, calles, agua potable, entre otros. Además, se financian obras con recursos públicos y remesas que caen, para bien o para mal, en la órbita de la propiedad privada, como templos y lienzos charros. El programa ha mostrado sus bondades, como promover la organización y participación de migrantes, pero al mismo tiempo revela sus limitaciones: se trata de obras bajo el esquema de la focalización selectiva, en localidades a menudo en proceso de despoblamiento y abandono, que no pretenden restaurar las capacidades productivas, generar excedente, reconstruir el tejido social y asentar bases de arraigo para la población, como correspondería a un proyecto de desarrollo local alternativo. Simplemente se trata de cubrir el déficit de algunas localidades en materia de infraestructura social básica. Este esquema de participación no es inédito, sino que corresponde al modelo diseñado por el liberalismo social que promueve la economía de mercado, la descentralización y la responsabilidad de la comunidad. Aunque su novedad es que una de las partes activas son los migrantes organizados.

Desde la óptica institucional, el desarrollo basado en las remesas salariales, productivas y participativas pasa por alto las causas profundas de la migración y el correlativo deterioro socioeconómico que padecen las localidades y regiones de alta migración. En su defensa, los gobiernos argumentan que la migración es un fenómeno que no puede contenerse, porque en el fondo les interesa que ésta siga cumpliendo su papel de “válvula de escape”, ante problemas como el desempleo estructural y la conflictividad social latente; aunque también les importa que las remesas sean el último bastión que resguarde la precaria estabilidad socioeconómica nacional y regional.

Asimismo, esta agenda política encubre la aportación de los migrantes a la dinámica de acumulación, crecimiento y desarrollo del país de destino. Los migrantes contribuyen a abaratar los procesos laborales, desplazar fuerza de trabajo nativa mejor posicionada, reemplazar trabajadores, incrementar la producción, consolidar el mercado interno mediante el consumo; abonan al fondo fiscal, a pesar de que suelen ser excluidos de servicios y bienes públicos; respaldan la reproducción demográfica, en la medida en que la población nativa observa tasas de natalidad estancadas. En términos gruesos, los migrantes laborales apuntalan la transferencia del excedente social hacia el capital y son sometidos a condiciones de superexplotación, que puede significar, entre otras cosas, un desgaste prematuro de las capacida-

des físicas de los migrantes, al estar expuestos a accidentes, enfermedades y jornadas laborales intensivas.

Por si fuera poco, se omiten los múltiples costos, pérdidas y transferencias asociados a la migración forzada en los lugares de origen. Entre los costos, podemos mencionar el desmantelamiento productivo, destrucción de procesos de socialización, desintegración familiar, transmisión de enfermedades, desórdenes psicológicos, violencia intrafamiliar, drogadicción, cierre de escuelas, menor asignación de recursos fiscales, disminución de representación electoral, entre otros factores. El capítulo de las pérdidas está conformado por elementos como el proceso inexorable de despoblamiento, el derroche del bono demográfico y la pérdida del principal recurso, la fuerza de trabajo. Las transferencias incluyen el traspaso de los costos de formación de migrantes, como el gasto en materia de educación, salud y alimentación, sufragado tanto por las familias y los migrantes mismos como por el Estado. Además, contempla la pérdida de recursos humanos valiosos, principalmente fuerza de trabajo joven y el personal altamente calificado. La formación de estos recursos humanos no significa prácticamente ninguna erogación para el país de destino.

Una conclusión importante es que tanto las contribuciones directas de los migrantes a la economía receptora como los múltiples costos, transferencias y pérdidas derivados de la migración son de tal peso que pulverizan el posible aporte de las remesas salariales, productivas y participativas en la supuesta gestación de dinámicas de desarrollo local, regional o nacional. El balance negativo constituye un signo ominoso de la crisis social imperante en vastas zonas del país y advierte sobre los riesgos de optar por una salida falsa hacia el desarrollo. En tal sentido, es importante reconocer el enorme sacrificio y la voluntad de los migrantes para respaldar económicamente a sus comunidades, pero también resulta fundamental advertir sobre la desmesura de achacar responsabilidades a los migrantes en tareas que no son de su competencia, en descargo de las tareas correspondientes a la gestión pública del desarrollo.

La publicación de este libro ha sido posible gracias al apoyo de Fondos Mixtos (Fomix) Conacyt-Godezac como parte del proyecto de investigación con clave ZAC-2007-CO1-81717.